



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)**

Demandante: FERNANDO DE JESÚS CORREA VELÁSQUEZ  
Demandados: ACP COLPENSIONES; PROTECCIÓN S.A.; COLFONDOS S.A. y  
PORVENIR S.A.  
Radicado: 05001 31 05 011 2018 00665 01  
Sentencia: S-211

### **AUTO**

En atención a la escritura pública 3377 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., se le reconoce personería como apoderado judicial al Dr. RICHARD GIOVANNY SUÁREZ TORRES, T.P. 103.505 del C. S. de la Judicatura.

Se accede además a la sustitución de poder presentada por el referido apoderado, a favor del Dr. MAURICIO LARA GARCÍA, portador de la T.P. N° 273.006 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal.

De otro lado, según la escritura pública 2513 del 24 de julio de 2019, conocida según certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, se le reconoce personería como apoderado judicial de COLFONDOS S.A. al Dr. JAIR FERNANDO ATUESTA REY, T.P. 219.124 del C. S. de la Judicatura.

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el día 19 de julio de 2021<sup>1</sup>.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

FERNANDO DE JESÚS CORREA VELÁSQUEZ demandó a PROTECCIÓN S.A., a PORVENIR S.A., a COLFONDOS S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene a las demandadas a las costas del proceso.

### **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 13 de octubre de 1956; que estuvo afiliado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el 19 de abril de 1982, entidad en la que alcanzó a acumular un total de 641 semanas de cotización; que se trasladó al

---

<sup>1</sup> Repartido a este Tribunal, el 2 de diciembre de 2021.

Régimen de Ahorro Individual a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. el 18 de diciembre de 1996 cuando laboraba al servicio de COLTEJER S.A.; que posteriormente se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A. el 15 de febrero de 2012; que el 27 de noviembre de ese mismo año se vinculó a la AFP HORIZONTE S.A.; que en toda su vida tiene cotizadas un total de 1668 semanas de cotización; que al momento de su traslado al RAIS no le fue suministrada información relacionada con la edad mínima requerida o el saldo en su cuenta de ahorro individual que debía acumular para acceder a una pensión, ni la diferencia en la mesada pensional entre un régimen y otro; y que una simulación de su situación pensional muestra como en COLPENSIONES podría obtener una mesada pensional superior a la que le podría corresponder en PORVENIR S.A.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento del demandante y su afiliación a esa entidad, aclarando que la decisión adoptada fue basada en una manifestación libre y voluntaria. Se opuso además a las pretensiones de la demanda al considerar que nos encontramos ante un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento, realizado de forma libre y espontánea. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones y traslado de la totalidad de aportes a COLFONDOS S.A.

PORVENIR S.A. solamente acepta la afiliación del demandante a esa entidad, advirtiéndole que la misma se realizó luego de entregarle una información completa que para esa época se hacía de forma verbal, cuya manifestación de voluntad se dejaba plasmada en el respectivo formulario de vinculación. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe,

ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada, improcedencia de reconocimiento de perjuicios y compensación.

COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación a esa entidad y el posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso además a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Como excepciones propuso improcedencia de declarar nulo o ineficaz el traslado, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

COLFONDOS S.A. también acepta la fecha de nacimiento del demandante y la afiliación a esa entidad en el año 2012, indicando que no le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con otras entidades. Señala que su afiliación al RAIS se produjo con fundamento en una decisión libre y voluntaria. Se opuso igualmente a las pretensiones y como excepciones propuso falta de legitimación en la causa por pasiva, no existe prueba de causal de nulidad alguna, prescripción, compensación, pago, buena fe, saneamiento de cualquier presunta nulidad, ausencia de vicios del consentimiento y obligación a cargo de un tercero.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 19 de julio de 2021, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, *i)* DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por el demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por PROTECCIÓN S.A. así como los posteriores traslados dentro de ese mismo régimen, ORDENÁNDOLE a PORVENIR S.A., trasladar a COLPENSIONES el saldo existente en su cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros; *ii)* ORDENÓ a todas las AFP del régimen privado la devolución de las cuotas de

administración, recibidos durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a cada entidad; *iii*) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas y reactivar la afiliación del demandante al RPMPD; y *iv*) CONDENÓ en costas a PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho el equivalente a \$1`500.000 a cargo de cada una de ellas.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con lo decidido, el apoderado de PROTECCIÓN se opuso a la orden de traslado de las comisiones de administración, por ser un descuento autorizado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y realizado como contraprestación por la buena gestión de los recursos de la cuenta de ahorro individual, frente al cual opera la prescripción por ser un concepto de tracto sucesivo y no financiar directamente la pensión de vejez.

A su turno, el apoderado de PORVENIR S.A. solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia en su totalidad. Para ello señala que la Corte Constitucional ha analizado la exequibilidad de los dos regímenes pensionales, los cuales han sido aceptados y coexisten entre sí. En cuanto al deber de información, es preciso tener en cuenta la ubicación espacio temporal de la exigencia de asesoría y buen consejo que es apenas para el año 2008, lo que no existía en aquella época en que se produjo el traslado de régimen pensional. El afiliado permaneció por más de 20 años en el RAIS haciendo varios traslados horizontales, sin que se esté vulnerado su derecho a la seguridad social en tanto allí puede acceder a la pensión de acuerdo a las características propias de éste régimen; lo que se pretende obedece a una razón económica que no es suficiente para la declaratoria de ineficacia que se dispuso en primera instancia.

En cuanto a los gastos de administración y seguros previsionales, se trata de obligaciones de tracto sucesivo y en esa medida ha operado

la prescripción, sin que tampoco haya lugar a condena en costas toda vez que lo resuelto no podía hacerse de manera oficiosa en virtud de la prohibición legal en que se encuentra el demandante y su buena fe en el actuar.

Finalmente, el apoderado de COLPENSIONES advirtió que el juez no tuvo en cuenta las manifestaciones realizadas por el demandante en su interrogatorio de parte, que, si bien gira en torno a la mesada pensional, ese no debería ser el motivo para declarar la ineficacia. Con esa decisión podría presentarse una afectación a la sostenibilidad del sistema con la obligación asumir la carga económica por la afiliación del demandante.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Dentro del término del traslado concedido a las partes, el apoderado de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión indicando que la sentencia de primera instancia no tiene en consideración las implicaciones económicas y administrativas que representan y no se tiene en cuenta que no tuvo participación en el acto jurídico de traslado que se está declarando ineficaz, por lo que es un tercero de buena fe. Solicita se revoque la sentencia y de no ser así que se ordene la devolución de todos los conceptos recibidos con motivo de la afiliación del demandante.

La apoderada de PORVENIR S.A. hizo lo propio indicando que, al momento del traslado del demandante a esa entidad, se cumplieron con los requisitos legales exigidos para la fecha en cuanto al deber de información, pues la asesoría brindada se efectuó de conformidad con las disposiciones legales que se encontraban vigentes. De otro lado, no comparte la decisión de ordenar el traslado de las cuotas de administración y en ese sentido solicita se revoque la sentencia de primera instancia.

La parte actora se pronunció solicitando confirmar la decisión de primera instancia ya que el fondo privado de pensiones, al momento de tramitar el traslado de régimen pensional, no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente, la cual le permitiera tomar una decisión consciente sobre las implicaciones que en su futuro pensional acarrearía el traslado, por lo cual, ante la falta de esa asesoría e información, no puede hablarse que se dio de manera libre y voluntaria.

Finalmente, el apoderado de COLFONDOS S.A. solicita que no se le ordene retornar conceptos distintos a los enunciados por el Juez de Primera Instancia teniendo en cuenta que ya se ocupó de trasladar todos los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual que alguna vez alcanzó a tener, de manera que ya no tiene recursos derivados de esa afiliación. Adicionalmente, considera que no es posible la indexación de los conceptos cuya devolución se ha ordenado en la medida que con los rendimientos generados ha quedado más que compensado cualquier diferencia que pudiera haber surgido, lo que además desconocería los principios de consonancia y congruencia de la sentencia.

### **CONSIDERACIONES:**

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de las entidades codemandadas a través de sus respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en lo no recurrido, con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación del señor FERNANDO DE JESÚS CORREA VELÁSQUEZ realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que cada entidad queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** FERNANDO DE JESÚS CORREA VELÁSQUEZ nació el 13 de octubre de 1956; **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 19 de abril de 1982, completando en esa entidad un total de 463.14 semanas de cotización; **(iii)** el 18 de diciembre de 1996 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A.; **(iv)** posteriormente se trasladó a la AFP COLFONDOS S.A. según formulario de vinculación del 15 de febrero de 2012; y **v)** posteriormente se trasladó a la entonces AFP HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A. según formulario del 27 de noviembre de ese mismo 2012, entidad en la que se encuentra vinculado en la actualidad.

Lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS, administrado en este caso por la AFP PROTECCIÓN S.A., y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que el afiliado no ha



recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”*

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del

consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Además, del interrogatorio de parte que le fuera practicado al afiliado, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información. Si bien pudo haber recibido algunas

explicaciones generales acerca del funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual y los rendimientos que generarían los aportes acumulados en su cuenta de ahorro individual, ello no significa una asesoría completa, clara, detallada y precisa de todos los alcances de su decisión.

Tampoco es de recibo el argumento planteado por la AFP PORVENIR S.A. relacionado con que el actor se trasladó dentro del mismo RAIS, lo que demostraría su intención de permanecer en ese régimen. Y no lo es porque al respecto también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *"... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad"*.

Ahora bien; otro argumento que no se comparte es el planteado por COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello

mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual. junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

### **Devolución cuotas de administración y demás conceptos.**

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, tema cuestionado en el recurso de apelación de las distintas AFPs, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a

COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

*(...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”* (Resaltado por la Sala)

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

*“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)*

*De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”*

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA pero ADICIONADA en el sentido de ordenarle a las AFP PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., que procedan con la devolución, no solo de las cuotas de administración, sino también el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima y los porcentajes de primeras de seguros y reaseguros, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el señor FERNANDO DE JESÚS CORREA VELÁSQUEZ estuvo vinculado a cada entidad.

Lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha

sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

*“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”*

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

### **Costas procesales.**

En este caso, efectivamente no fue el actuar de PORVENIR S.A. el que generó la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional. Es decir, el señor FERNANDO DE JESÚS ya venía afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a la AFP COLFONDOS S.A. y su afiliación a PORVENIR S.A. fue producto de un movimiento dentro del mismo régimen, en tanto el traslado desde el entonces INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES ya se había producido, de manera que no fue propiamente su incumplimiento al deber de información el que dio lugar al presente proceso ni a la declaratoria de ineficacia de traslado.

En consecuencia, se revocará la condena en costas impuesta a PORVENIR S.A., a quien se le ABSOLVERÁ por este concepto.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES y a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'000.000, distribuidas entre ambas en partes iguales de \$500.000 cada una.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín, el día 19 de julio de 2021, pero con las siguientes novedades según se dijo en la parte motiva: **1.** La **REVOCA** en cuanto condenó en costas a PORVENIR S.A., para en su lugar absolverla por este concepto; y **2.** La **ADICIONA** en el sentido de ordenarle a las AFP PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A., que procedan igualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, los porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el señor FERNANDO DE JESÚS CORREA VELÁSQUEZ estuvo afiliado a cada entidad.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES y a favor del



demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '000.000, distribuidas entre ambas en partes iguales de \$500.000 cada una.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e070acbe888a99699b45f12dabd08bc44e0e3e0aa26912ba24072b3a38bbeb16**

Documento generado en 18/08/2022 03:13:37 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>